

15 de noviembre de 2022

Las incertidumbres de Hidroituango

Es el momento de volver a un manejo serio y responsable desde lo técnico

Cuando tan solo faltan dos semanas para la fecha en la que se esperaba la puesta en operación de las dos primeras unidades de Hidroituango (30 de noviembre de 2022) resulta desconcertante, incoherente e improvisada la forma en que se viene informando respecto a los programas para tal inicio de la central, con mensajes dispersos, inconsistentes y hasta contradictorios entre autoridades de distinto orden, lo que sólo ha generado desconfianza e incertidumbre general.

La gestión de la información para un proyecto de estas características debería ser todo lo contrario: tener prioridades bien definidas y un único vocero con información clara, oportuna y precisa soportada en los análisis técnicos y con total coordinación entre las entidades que participan en el proceso. El criterio fundamental para decidir la fecha de la puesta en operación del proyecto debe ser el de garantizar la seguridad y sostenibilidad del mismo, priorizando la vida y el medio ambiente, y un manejo adecuado de riesgos, especialmente por las comunidades localizadas aguas abajo del proyecto y con potencial riesgo; mas no lo debe ser la posible multa, tema que debería aplazarse para su análisis y decisión hasta que se garantice el inicio de la operación en forma segura y a la mayor brevedad posible, para no distraer esfuerzos en nada distinto al objetivo primordial.

Es hora de recurrir nuevamente a la seriedad y responsabilidad de los técnicos y especialistas tanto de EPM como de los contratistas, interventores y asesores, quienes estarían en capacidad de entregar la información precisa y detallada sobre el estado de cada una de las obras; y, además, lo que se puede esperar en las fases siguientes del proyecto, con alta confiabilidad, y así evitar la dañina especulación que ha reinado en los últimos meses. Ellos cuentan con los instrumentos usuales en casos como éste para expresar sus opiniones en forma argumentada y soportada, amparados en su conocimiento y amplia experiencia, así como en las mediciones que se han realizado durante varios años sobre el comportamiento del macizo rocoso y las distintas obras del proyecto.

En medio de toda esta compleja situación se debe resaltar el esfuerzo del personal de EPM y de todos los contratistas de distinto orden que, sin duda, han estado haciendo todo lo posible para que el proyecto entre en operación de forma segura a la mayor brevedad. Es necesario exigir también que las autoridades tengan un manejo transparente y objetivo de los temas del proyecto, que permita a la ciudadanía estar adecuadamente informada, y tener la tranquilidad que las decisiones del proyecto se toman con seriedad y responsabilidad respetando las prioridades de la vida y el medio ambiente y con un adecuado manejo de riesgos.

Es de vital significado tener las dos primeras unidades en funcionamiento, pues sería un hito que cambiaría la perspectiva del proyecto. Pero, superadas las dificultades, también se requiere poner en operación las unidades tres y cuatro de la primera etapa, así como las cuatro de la segunda etapa, aunque sobre esta última ha sido muy escasa la información y, por tanto, mayores las dudas. Conviene recordar y enfatizar que para la estabilidad de las obras del proyecto es determinante contar con todas las unidades en operación lo antes posible, tal como se ha expresado en anteriores pronunciamientos de este Centro de Pensamiento, en la opinión de expertos y en las recomendaciones consignadas en el informe oficial del consultor Pöyry, ya que la plena y más pronta operación del proyecto, con el nivel de seguridad previamente determinado, es fundamental para que alcance su mejor desempeño y se acople en forma óptima para su operación en el Sistema Interconectado Nacional -SIN-.

El perjuicio acontecido, entre los hechos catastróficos y lo ocasionado con el mal manejo, ha sido general para el país, la región, Medellín y especialmente EPM, situación que se tornaría aún más crítica de existir mayores dificultades frente a la seguridad del proyecto y al manejo de la puesta en marcha de las primeras unidades de generación, por sus potenciales implicaciones financieras, comerciales, culturales y reputacionales. Difícil imaginar hasta hace poco tiempo que a una empresa de las calidades de EPM le pudiera ocurrir algo como lo que ahora sucede.

No se debe olvidar que Hidroituango representa cerca del 17% de la energía que requiere Colombia y un 13,5% de la capacidad instalada para la generación del país, por lo que es una pieza clave para la atención de la demanda eléctrica nacional en forma confiable y con calidad. El posible incumplimiento, especialmente en la medida en que se prolongue, ensombrecería el panorama energético, pues más allá de que las unidades entren o no en el tiempo previsto, aumentaría las dudas sobre el manejo del proyecto y el futuro de las unidades restantes por la falta de claridad de los administradores. A esta situación se sumaría el retraso que presentan los proyectos que se desarrollan en la Guajira con energías renovables no convencionales y el proyecto de la línea colectora para la evacuación de la energía al sistema interconectado, llevando a que se aumenten los riesgos de dificultades de suministro en los próximos años.

Hidroituango y EPM han sido víctimas de un manejo errático, mediático y personalizado, con grandes anuncios y promesas que se desvanecen, lo que solo ha producido incertidumbre y entorpecimiento del desarrollo del proyecto con presiones e indefiniciones que se terminan reflejando en las decisiones. Hoy cabe preguntarse qué ha pasado con temas que en su momento fueron grandes titulares de noticias escritas y habladas, y que congestionaron las redes sociales:

- La demanda contra los contratistas.
- Las implicaciones financieras para EPM por el manejo con los financiadores, como el pago anticipado de obligaciones con el BID y sus aliados, y el manejo con las agencias calificadoras de riesgos.
- Las actuaciones contrarias a los conceptos de los expertos de EPM, de los asesores y de otras voces independientes.
- El proceso licitatorio para el cambio de contratistas que, supuestamente, debería darse en este mes de noviembre, justo días antes de la fecha comprometida con la CREG, proceso que se ha aplazado en varias ocasiones y sobre el cual han existido y persisten muchas dudas, desde su motivación hasta la de acomodar los pliegos a las características de un proponente.
- El arreglo con las aseguradoras para cerrar el caso con la Contraloría General de la República, por no lograr de las aseguradoras todo el posible reconocimiento a que se tenía derecho de acuerdo al valor asegurado.

Por eso, es pertinente preguntarse por el papel y responsabilidad que le compete a las autoridades pertinentes y a los reguladores que han permitido llegar a esta crítica situación. Pero también es un llamado de atención a despertar ante el silencio generalizado que ha existido de los dirigentes políticos de las diversas corrientes, de los líderes cívicos, de los dirigentes empresariales y gremiales, de gran parte de los medios de comunicación y de la propia academia, así como de los mismos ciudadanos, que simplemente hemos dejado que todo esto pase como si fuese ajeno a nuestro propio destino. Y se ha permitido socialmente el manejo mediático, utilitarista y controversial de la información.

¡Aunque tarde, es hora de romper con dejar de actuar por miedo, indiferencia o complacencia!